

Fundación “Defendamos la Ciudad”

Luz 2889, Las Condes – Teléfonos 2330321 y 09/2585459

www.defendamoslaciudad.cl

Santiago, miércoles 25 de agosto de 2010

Señor Marcelo García
Punto Nacional de Contacto OCDE en Chile
Direcon, Ministerio de Relaciones Exteriores
Presente

REF. Membresía de Chile en la OCDE

De acuerdo al texto constitucional y como una más de las organizaciones de la sociedad civil informada, nos dirigimos a usted para expresarle que, si bien es loable que nuestro país forme parte desde los inicios del año en curso de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), tenemos la obligación de manifestarle que nuestra institucionalidad carece de los atributos mínimos necesarios para formar parte de esa reconocida organización internacional. Así, por lo demás, lo hemos venido sosteniendo desde hace un tiempo en diversas publicaciones de prensa. En razón de nuestra labor voluntaria de análisis y seguimiento en materias de vivienda, urbanismo, medio ambiente, obras públicas, transportes y patrimonio histórico, hemos adquirido un vasto conocimiento en torno a las prácticas de los actores públicos y privados en la aplicación de las políticas en esos sectores.

Todos sabemos que uno de los propósitos de la OCDE es potenciar en democracia el sistema económico de libre mercado, con altos estándares en la probidad y con el ejercicio pleno de la transparencia por parte de los agentes públicos y sus contrapartes privadas, con el objetivo de que el mercado asigne correctamente los recursos y la administración cumpla a cabalidad su rol fiscalizador. En nuestra opinión, verificamos que adolecemos de un pasivo en este ámbito, lo que nos obliga como país a superarnos para hacernos miembros íntegros de la OCDE.

Aspiramos a que se introduzcan los necesarios cambios en el aparato del Estado para implementar políticas nacionales tendientes a expandir la economía, derribando las barreras de entrada que limitan a tantos a transformarse en reales actores del mercado, y absorbiendo con ello la mano de obra cesante para lograr el consiguiente aumento paulatino en los niveles de vida de la población. Para alcanzar este correcto y civilizado escenario, la autoridad política debe necesariamente además hacer suya la convicción de que tiene el deber de otorgar un buen servicio a sus ciudadanos, que garantice equidad y transparencia en su quehacer cotidiano.

Sin embargo, y a pesar del discurso oficial, se sigue constatando en los hechos cómo las políticas públicas siguen presentando una serie de distorsiones que mantienen deliberadamente, por un lado, las condiciones de inequidad, y por otro, asignando cuotas de mercado y prebendas tributarias cuyos beneficiarios son algunas figuras relevantes de determinados sectores de la economía muy bien relacionados con las cúpulas del poder político.

Para ello se opera en negocios donde la discrecionalidad del Estado tiene una gran incidencia, como es el caso que se observa en la generación de los planos reguladores de

las comunas. Lo anterior, permite la obtención de altas plusvalías con los cambios de uso de suelo, normas de edificación y fundamentalmente con la expansión urbana en comunas periféricas. Necesariamente todo ello se consigue en la medida que el tráfico de influencias y adquisiciones prediales, con información privilegiada, se mantengan en secreto para la opinión pública, lacra que debemos erradicar.

Para probar este estado de cosas y respaldar nuestra objeción al sistema imperante, adjuntamos copia del reclamo C 566-10, presentado el 23 de agosto pasado en el Consejo para la Transparencia, en contra de Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) y Servicio de Impuestos Internos (SII), por negársenos ambos órganos del Estado, con distintos justificativos, una vital información de carácter pública. Próximamente dicho Consejo tendrá que resolver en su mérito sobre las garantías que nos otorga la Ley N° 20.285.

Leyendo ese documento, usted podrá convenir con nosotros, que es impresentable que nuestra institucionalidad (Minvu-SII) no disponga de las herramientas técnicas para hacer un cruce de información con el cual hubiera sido posible emitir un simple listado de nombres de sociedades o personas naturales que se beneficiarían patrimonialmente con una nueva política pública referida al ordenamiento territorial de la región metropolitana. Debemos tener en cuenta que ese proyecto expansivo de la ciudad fue concebido por el gobierno anterior, y respaldado por el actual, con el agravante de que esa iniciativa estaba convenida por el Minvu, desde fines del año 2006, con la asociación gremial empresarial que, en función de sus propios intereses, la requería. Al respecto, y para corroborar el aserto, se puede observar la dirección electrónica <http://www.cchc.cl/kwldg/databank/22144.pdf>

La transparencia, y naturalmente la probidad en las actuaciones de la Administración, son fundamentales en todo régimen democrático, recordando que las personas que ejercen autoridad son mandatarias de la ciudadanía, la que tiene, no sólo el derecho, sino la obligación de conocer y convalidar todo proyecto que afecte el bien colectivo. Por ello se habla tanto de *participación ciudadana*, aunque ésta en nuestro país sea sólo una alocución.

Señor García, en su calidad de punto nacional de contacto de la OCDE adscrito a la Cancillería, le agradeceremos que eleve este antecedente ante sus superiores con el propósito de que el gobierno, analizando esta presentación, y encontrándonos la razón, efectúe los cambios organizacionales, y asigne los recursos monetarios, que sean necesarios en la Administración para que las políticas propuestas cuenten *ex ante* de su aprobación con la debida diafanidad que exigen los estándares éticos y legales para prevenir todo acto reñido con la probidad. Así, pronto, Chile, será un meritorio miembro de la OCDE.

Le expresamos que nos ponemos a sus órdenes para analizar el asunto de la ausencia de transparencia en nuestro país y como es obvio, por último le solicitamos que esta nota petitoria sea publicada en <http://www.direcon.cl/transparencia/>

Atentamente,

Patricio Herman
Presidente

Se adjunta reclamo C 566-10 ante el Consejo para la Transparencia, documento que además se aprecia en

<http://www.defendamoslaciudad.cl/modulos.php?mod=noticias&fn=94e679ab46d568928ad91afb91a749bb&id=1624>

cc señor Raúl Urrutia, Presidente del Consejo para la Transparencia
cc señora Magdalena Matte, Ministra de Vivienda y Urbanismo
cc señor Julio Pereira, Director Nacional del Servicio de Impuestos Internos